



# Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

**EXPEDIENTE:**

CDHEC/4/2019/---/Q

**ASUNTO:**

Violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en sus modalidades de Dilación en la Procuración de Justicia.

**QUEJOSO:**

Q1.

**AUTORIDAD:**

Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales Región Centro.

**RECOMENDACIÓN NÚMERO 60/2019**

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a 20 de diciembre de 2019, en virtud de que la Cuarta Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, ha concluido la investigación realizada con motivo de los hechos que dieron lugar al expediente de queja CDHEC/4/2019/---/Q, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, se elaboró el proyecto que, con base en el artículo 127 del ordenamiento legal invocado, se turnó a la Visitadora General de esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que, finalmente, en apego a los artículos 195 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1, 2 fracción XIX, 3, 20 fracciones II, III y IV, 37 fracción V, de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y 99 del Reglamento Interior de esta Comisión, el suscrito, en mi carácter de Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, he considerado lo siguiente:



**I.- HECHOS**

**ÚNICO.-** El 6 de mayo de 2019, ante la Cuarta Visitaduría Regional de esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, el señor Q1 compareció a efecto de interponer formal queja por hechos que estimó violatorios a sus derechos humanos, atribuibles a servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Centro, los cuales describió textualmente de la siguiente manera:

*"...acudo ante ese Organismo a interponer una queja en contra del agente del ministerio público de delitos viales, adscrito al municipio de Monclova, en virtud de que hace más de dos años fui atropellado por una persona la cual trabajaba para la empresa X, ocasionándome severas lesiones consistentes en 4 fracturas de pelvis, reventamiento de esfínteres, de ano, y glúteo, que me dejaron secuelas ya que el esfínter no volvió a funcionar, además de una hernia, y presento problemas para caminar, por lo que se dio inicio a una carpeta de investigación con número ----/2016, la cual al momento no ha presentado avances, esto a pesar de que mi abogado y yo hemos presentado todos elementos para su judicialización tales como testigos y dictámenes médicos, pero el agente del ministerio público encargado de la investigación se niega a pasar el asunto ante el juez con el argumento de que "ya va a arreglar la otra parte", señalando que en cualquier momento nos va a llegar a un cheque para repararme el daño, sin embargo esto no ha sucedido y ya han pasado mas de 2 años, por lo cual yo considero que el asunto debe ser turnado a la autoridad competente para que se resuelva conforme a derecho corresponda..." (sic)*

Por lo anterior, el C. Q1, solicitó la intervención de esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual, mediante la integración del expediente, logró recabar las siguientes:



**II.- EVIDENCIAS**

**PRIMERA.** - Queja interpuesta por el C. Q1, el 06 de mayo de 2019 en la que reclamó hechos presuntamente violatorios a sus derechos humanos, atribuibles a personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, Región Centro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, anteriormente transcrita.

**SEGUNDA.-** Mediante oficio FGE/DRC-----/2019, de 24 de mayo de 2019, el A1, Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, remitió el diverso oficio FGE/UIV/----/2019, de 23 de mayo de 2019, suscrito por el A2, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, mediante el cual rindió informe en relación con los hechos materia de la queja, en el que textualmente se informó lo siguiente:

*"...En atención a su oficio número FGE/DRC-----/2019\_ mediante el cual solicita rinda un informe pormenorizado para dar contestación a la queja presentada ante la comisión de derechos humanos del estado de Coahuila, por Q1, en contra de esta autoridad por manifestar violaciones a los derechos humanos del quejoso, de la cual me permito manifestar lo siguiente:*

*Que no existe una violación a los derechos humanos del quejoso Q1. toda vez que él y su abogado han aportado todos los elementos para La judicialización de su carpeta de investigación con número ----/UIV/2016 donde tiene el carácter de víctima para lo cual me permito señalar que de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación no se ha podido establecer plenamente la identificación del imputado o indiciado ya que los testigos manifiestan que el responsable es una persona de nombre E1 Alias la X, Si bien es cierto existe un acta de individualización de un probable responsable de nombre E2, de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, no se desprende que sea este la persona que conducía el vehículo responsable, sino más bien es la persona quien tenía asignado dicho vehículo por parte de la empresa dueña del mismo y los testigos señalan como responsable del accidente a E1 Alias la X quien es señalada como la persona que conducía el vehículo que provoco las heridas a la víctima Q1, derivado de lo anterior se han realizado diferentes diligencias tendientes a la identificación plena del probable responsable lo cual no ha sido posible al*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

*día de hoy, siendo esta la causa principal por la cual no ha sido posible ejercitar acción penal. Por tal motivo considero que no existe violación a derechos humanos ya que al estar parcialmente identificado el imputado no es posible ejercitar acción penal, porque no se tiene nombre completo, ni el domicilio donde pueda recibir notificaciones por parte del juzgado o esta autoridad, señalando que se continua con las diligencias en coordinación con agentes de la agencia de investigación criminal para lograr la plena identificación del responsable y una vez realizado lo anterior se solicitara audiencia inicial para formular imputación, así mismo quiero manifestar que no se puede solicitar orden de aprehensión ya que no se tiene una identificación plena del imputado, datos tales como nombre completo, domicilio, edad, lugar de nacimiento, etc.*

*No omito señalar que el suscrito se encuentra abierto a la posibilidad de una conciliación con el quejoso...”*

**TERCERA.** - Acta circunstanciada de 26 de mayo de 2019, levantada por personal de la Cuarta Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, Coahuila de Zaragoza, relativa a la comparecencia del quejoso Q1, a efecto de desahogar la vista en relación con el informe rendido por la autoridad, quien textualmente manifestó lo siguiente:

*“.....comparezco ante ese Organismo a desahogar la vista de los informe que rindieron las autoridades en relación a la queja que presenté, y al respecto quiero manifestar que efectivamente, los testigos señala que la persona que me atropelló fue E1, sin embargo, el ministerio público no ha pedido ninguna información al representante de la empresa que permita ubicarlo, por lo cual considero que se está incurriendo en una omisión, motivo por el que pido a derechos humanos que intervenga al respecto y se dé seguimiento al expediente para que se resuelva conforme a derecho.....”*

**CUARTA.-** Acta circunstanciada de 26 de junio de 2019, levantada por personal de la Cuarta Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, Coahuila de Zaragoza, relativa a la llamada telefónica del quejoso Q1, a efecto de manifestar lo siguiente:



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

*"....el motivo de su llamada era para hacer del conocimiento que el Agente del Ministerio Público sigue sin integrar la carpeta, por lo cual contrató a un abogado de nombre Erasmo Martínez, para que le dé seguimiento a su asunto, ya que además de la denuncia, va a presentar una demanda civil para pedir la indemnización, motivo por el cual pidió que se dé continuidad al asunto ya que considera que es demasiado el tiempo que ha tardado el Ministerio Público para integrar su carpeta....."*

**QUINTA.** - Acta circunstanciada de 5 de julio de 2019, levantada por personal de la Cuarta Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, Coahuila de Zaragoza, relativa a la comparecencia del C. E3, quien dijo ser abogado del C. Q1, a efecto de manifestar lo siguiente:

*"....comparezco ante ese Organismo a en virtud de que soy el abogado del señor Q1, quejoso dentro del expediente CDHEC/4/2019/---/Q, y el motivo de mi presencia en esta oficina es para hacer del conocimiento que hace unos días solicité copias al Ministerio Público de la indagatoria ----/2016, las cuales me fueron proporcionadas y me percaté de que hay muchas irregularidades por parte del Ministerio Público, por lo cual yo solicito que se de seguimiento a la queja que interpuso mi cliente ante este Organismo ya que creo que se están violando sus derechos humanos....."*

**SEXTA.** - Acta circunstanciada de 30 de octubre de 2019, levantada por personal de la Cuarta Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, Coahuila de Zaragoza, relativa a la comparecencia del C. E3, quien dijo ser abogado del C. Q1, a efecto de manifestar lo siguiente:

*"...comparezco ante ese Organismo a en virtud de que soy el abogado del señor Q1, quejoso dentro del expediente CDHEC/4/2019/----/Q, y el motivo de mi presencia en esta oficina es para hacer del conocimiento que el Ministerio Público continua con negligencias dentro de la indagatoria ----/2016, ya que van varias veces que solicita a la empresa X que brinde información sobre su trabajador el cual es responsable de las lesiones que sufrió mi cliente, y la empresa hace caso omiso a los requerimientos, y la agente del ministerio público no ha hecho efectivos los apercibimientos que hace a la empresa en caso de omitir cooperar"*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

*con su investigación, lo cual yo considero viola los derechos humanos de mi cliente ya que esa información es primordial para poder integrar el expediente...”*

**SÉPTIMA.** - Acta circunstanciada de 21 de noviembre de 2019, levantada por personal de la Cuarta Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, Coahuila de Zaragoza, relativa a la diligencia realizada en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales de la Región Centro de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, relativa a la diligencia de inspección a la Carpeta de Investigación ----/UIV/2016, en la que textualmente se asentó lo siguiente:

*“...Que siendo las 09:15 horas de este mismo día, me constituí en las instalaciones de la Agencia del ministerio Publico ubicadas en calle hidalgo s/n, esquina con Padre Larios de la zona centro de la ciudad de Monclova Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de solicitar información relativa al estado que guarda la carpeta de investigación ----/UIV/2016, siendo atendida por la A3, Agente del Ministerio Publico de la ciudad de Monclova Coahuila de Zaragoza, a quien una vez hice del conocimiento el motivo de mi presencia, me proporciono los autos originales de la citada indagatoria, misma que tuve a la vista, pudiendo dar cuenta que en la misma se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 23 de diciembre del 2016, Denuncia por comparecencia interpuesta por la E4; en fecha 23 de Diciembre del 2016, se solicitó peritaje criminalístico; 23 de diciembre 2016, se solicita peritaje médico forense; 23 de diciembre 2016, se realizó el Dictamen inicial de lesiones; 26 de junio del 2017, se solicita informe a la oficina de recaudación de rentas de Monclova; 07 de agosto del 2017, se giró citatorio a la testigo E5; 07 de agosto del 2017, se giró citatorio al testigo E2; 22 de agosto del 2017, diligencia de campo llevada a cabo por la Policía de Investigación; 29 agosto del 2017, se giró oficio a Director del Instituto Mexicano del Seguro Social solicitando expediente clínico; 31 de agosto del 2017, se solicita informe a la unidad de investigación de asuntos viales; 06 de septiembre del 2017, remite expediente clínico el Instituto Mexicano del Seguro Social al ministerio público; 20 de septiembre del 2017, se giró citatorio a testigo E6; 20 de septiembre del 2017, se giró citatorio a testigo E7; 21 de septiembre del 2017, ratifica querrela E8; 21 de septiembre del 2017, se envió el expediente al área de medios alternos y solución de conflictos de la Fiscalía General del Estado; 21 de septiembre del 2017, se recibe escrito de asesor jurídico*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

*E9; 27 de septiembre del 2017, se recibe escrito de asesor jurídico E9, mediante el que solicitó que se remitiera la carpeta de investigación al Agente del ministerio público de la unidad de investigación y litigación de asuntos viales; 07 de octubre del 2017, escrito abogado E9 mediante el que solicitó copias de la indagatoria; 10 de octubre del 2017, escrito abogado E9 mediante el que solicitó copias de la indagatoria; 25 de enero 2018, se giró oficio de comandante de la policía investigadora, solicitándole que se avoque a búsqueda de indicios para integración de la carpeta de investigación; 30 de agosto del 2018, se rinde informe pericial en materia de tránsito terrestre; 21 septiembre del 2018, se giró oficio al área de recursos humanos de la empresa X, solicitándole que proporcionara el nombre completo de E1; 28 de septiembre del 2018, se rinde dictamen definitivo de lesiones por parte del perito médico forense; 02 de octubre del 2018, se recibe escrito por parte del abogado E3, mediante el que solicitó copia autentica de la carpeta de investigación; 03 de octubre del 2018, se giró citatorio a testigo E7; 16 de octubre del 2018, solicita nuevamente informe a la empresa X solicitándole que proporcionara el nombre completo de E1; 15 de noviembre del 2018, se solicita informe a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte en relación al señor E1; 07 de diciembre del 2018, se solicitó informe al Delegado de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en relación al vehículo de la empresa X; 24 de enero del 2019, se rinde informe contestación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, señalando que de acuerdo al (SIAF) Sistema Institucional de Autotransporte Federal, no hay información alguna del vehículo toda vez que en fecha 19 de marzo del año 2013, fue dado de baja la placa X del servicio público federal y en ese entonces esta se encontraba dada de alta a nombre de E10; 15 de Mayo del 2019, se solicitó informe al Administrador Local de recaudación de Monclova Coahuila en relación a los hechos materia de investigación; 15 de Mayo del 2019, se solicita investigación comandante de policía Investigación Criminal, solicitando acta de identificación o individualización del imputado a la persona de nombre E1 alias la "X"; 17 de Mayo del 2019, se giró citatorio a E6 representante de la empresa X; 20 de mayo de 2019, se recibe informe por parte de la unidad de investigación de asuntos viales de la Fiscalía General del Estado; 21 de Mayo del 2019, se recibe contestación por parte del Administrador local de recaudación de Monclova Coahuila donde señaló que no hay registro de vehículo solicitado en el padrón que lleva dicha dependencia; 09 de julio de 2019, se recibe escrito por parte del abogado E3; 20 de agosto de 2019, se recibe escrito por parte del abogado E3; 04 de Septiembre*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

*del 2019, se rinde dictamen definitivo de las lesiones por parte del perito médico forense; 24 de septiembre del 2019, se giró oficio a Coordinadora del centro de atención a Víctimas solicitando atención psicológica a la víctima Q1; 25 de septiembre del 2019, solicita informes a diferentes Instituciones como lo son Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional Electoral, Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, y a la Unidad de Medidas Cautelares; solicitando información del señor E1; 08 de octubre del 2019, rinde informe la Comisión Federal de Electricidad, relativo a los hechos materia de investigación; 08 de octubre del 2019, rinde informe el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, relativo a los hechos materia de investigación; 09 de octubre del 2019, rinde informe la Unidad de Medidas Cautelares, relativo a los hechos materia de investigación; 11 de octubre del 2019, se gira oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitando información sobre Benito Rodríguez; 15 de octubre del 2019, se rinde nuevamente Dictamen definitivo de lesiones por parte de servicios periciales médico forense; 10 de octubre del 2019, rinde informe el Instituto Nacional Electoral, relativo a los hechos materia de investigación; 17 de octubre del 2019, se recibe escrito de E3 mediante el que solicito copias de la carpeta de investigación; 17 de octubre del 2019, contestación por parte de IMSS en relación a E1, 13 de noviembre del 2019, informe de recursos humanos de la empresa X solicitando informe de nombre completo de E1. Siendo todas las diligencias hechas en la carpeta de investigación, agradecí las atenciones brindadas y me retire de lugar...”*

Evidencias que se valorarán de forma individual y en su conjunto, en sana crítica y de acuerdo a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

### III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El quejoso Q1 ha sido objeto de violación a sus derechos humanos, concretamente a su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de justicia por servidores públicos de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales de la Región Centro de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes incurrieron en retardo negligente en la función investigadora de los delitos dentro de la indagatoria iniciada con motivo de la denuncia presentada por el quejoso quien resultó con lesiones a consecuencia de haber sido atropellado, evitando con ello, que se administre justicia en forma pronta y expedita conforme al principio establecido en el artículo 17 de la Constitución



# Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las garantías de legalidad y seguridad jurídica están contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se consagran en los siguientes términos:

Artículo 14.- *"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho."*

Artículo 16.- *"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."*

## IV.- OBSERVACIONES

**PRIMERA.** - Dispone el artículo 2, fracción XI, de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, que los derechos humanos son las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los reconocidos en los Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales en los que México sea parte.

**SEGUNDA.** - La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, es el organismo constitucional encargado de tutelar que sean reales y efectivos los derechos fundamentales de toda persona que se encuentre en el territorio coahuilense, por lo que, en cumplimiento a tal encomienda, solicita tanto a las autoridades como a servidores públicos, den cabal cumplimiento a las disposiciones legales.

**TERCERA.** - De conformidad con el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 195 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 19 y 20 fracciones I, III y IV de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, este organismo público defensor de los derechos humanos es competente para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones que se imputen a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal.



**CUARTA.-** Para el análisis y estudio que se efectúa en el presente capítulo, los conceptos de violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de justicia fueron actualizados por servidores públicos de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales de la Región Centro de la Fiscalía General del Estado, precisando que las modalidades expuestas implican las siguientes denotaciones:

Violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de justicia:

- 1.- El retardo o entorpecimiento malicioso o negligente;
- 2.- En las funciones investigadora o persecutoria de los delitos;
- 3.- Realizada por las autoridades o servidores públicos competentes.

Una vez determinada la denotación de la violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad mencionada, se está en aptitud de entrar al estudio de todos los elementos que permitirán establecer la relación entre los hechos motivo de la queja que dio origen a la presente Recomendación y la forma en que estos violentaron el derecho humano referido, en su modalidad mencionada.

En primer término, el respeto al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de las personas, se traduce en que los servidores públicos están obligados a hacer cumplir y observar la ley, para lo cual deben realizar todas las actividades necesarias para ello, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México, y en las leyes y los reglamentos aplicables. En tal sentido, el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, vigente al momento en que ocurrieron los hechos materia de la queja, establece lo siguiente:

*"Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y su incumplimiento, dará lugar al procedimiento y a las*



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

*sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:*

*I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;*

*II.- a XXI.- .....*

*XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público.*

*XXIII .- a XXVII.- .....*

*El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado como falta administrativa.”*

Es entonces, que el debido ejercicio en la función pública, se establece como el cumplimiento de la obligación de las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos, así como salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Bajo esta tesitura, los diversos instrumentos internacionales que regulan el actuar de las naciones, en materia de Derechos Humanos y de los cuales nuestro País es parte, establecen el derecho a *la justa determinación de sus derechos*, el cual se contempla en el artículo 10, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 8, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, de igual forma en el artículo 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Precisando lo anterior, el quejoso Q1 fue objeto de violación a su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de justicia por servidores públicos de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales de la Región Centro de la Fiscalía General del Estado, quienes incurrieron en retardo negligente en la función investigadora de los delitos dentro de la indagatoria iniciada con motivo de la denuncia presentada por la presunta comisión de un delito en el que el quejoso resultó lesionado a consecuencia de haber sido atropellado, evitando con ello, que se administre justicia en forma pronta y expedita conforme al principio establecido en el artículo 17



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se expondrá en párrafos siguientes.

De las constancias que integran el expediente, existe una dilación en la procuración de justicia, enmarcada en los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, por lo que los diversos ordenamientos constitucionales y legales en los que se encuentran protegidos esos derechos humanos, establecen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"ARTÍCULO 1.-

...

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

"ARTÍCULO 17.-

...

*Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..."*

"ARTÍCULO 20.-

...

*C. De los derechos de la víctima o del ofendido:*

*I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

*II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.*

*Quando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia deberá motivar y fundamentar su negativa;*

*III. a VII. ...”*

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en vigor al momento en que se presentó la queja por hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos:

*“Artículo 7.-Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Federal.*

.....

*Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que determine la ley.”*

*Artículo 113.- La procuración de justicia es una función esencial y por tanto indelegable del Estado que tiene por objeto proteger los intereses de la sociedad y resguardar la observancia de la ley, particularmente por lo que toca a la investigación y persecución de los delitos del orden común. Se ejerce a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, denominado Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza que se integra por el Ministerio Público, sus órganos auxiliares y áreas de apoyo.*



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

*La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*

*El Ministerio Público es la institución única e indivisible, que dirige la investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delitos y, en su caso, promueve el ejercicio de la acción penal ante los tribunales de justicia, protege y brinda atención a las víctimas del delito y testigos, con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos del imputado y demás intervinientes. En el ejercicio de su función de investigación y persecución de los delitos, el Ministerio Público goza de total autonomía, para garantizar su independencia en la emisión de las determinaciones de su competencia, por lo que ningún funcionario del Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder podrá intervenir en sus decisiones.*

*La actuación del personal de procuración de justicia se regirá bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad, transparencia, objetividad, independencia y respeto a los derechos humanos.*

*El Fiscal General del Estado presidirá al Ministerio Público y será el titular de la fiscalía, con las facultades y obligaciones que establecen esta Constitución y las leyes. En el ámbito de la investigación y persecución de los delitos, las decisiones del Fiscal General del Estado únicamente estarán sujetas al mandato de la ley.*

*La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza contará con una Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, dotada de autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado previa convocatoria, pública, abierta y transparente por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso. El Ejecutivo podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo.*

*El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, podrá ser removido libremente por el Fiscal General del Estado. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

*plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la Fiscalía Especializada será restituido en el ejercicio de sus funciones.*

Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza:

*ARTÍCULO 6.- "PRINCIPIOS RECTORES. Son principios rectores de la presente Ley los siguientes:*

*A. En lo referente a las atribuciones del Ministerio Público:*

*VIII. LEGALIDAD. El Ministerio Público realizará sus actos con estricta sujeción a la Ley.*

*Siempre que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito que se persiga de oficio estará obligado a investigarlo. La misma obligación tendrá respecto de los delitos que sólo se persigan por querrela a partir de que la misma le sea formulada.*

*El ejercicio de la acción penal será obligatorio tan pronto estime acreditadas las categorías procesales, según las contemple el Código de Procedimientos Penales, y siempre que la misma resulte procedente conforme a lo dispuesto en esta Ley.*

*El no ejercicio de la acción penal sólo podrá decretarse por las causales expresamente determinadas en la ley.*

*IX. OPORTUNIDAD. En función del principio de legalidad el Ministerio Público sólo podrá suspender la investigación del delito o prescindir total o parcialmente de su persecución ante los Tribunales, en los casos expresamente establecidos en la Ley y en los términos señalados por la misma.*

*B. En lo referente a la integración de la Averiguación Previa y a la actuación del Ministerio Público durante el proceso:*



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

*IV. LEALTAD. Quienes con cualquier carácter intervengan en la Averiguación Previa deberán conducirse con lealtad y buena fe, evitando planteamientos dilatorios o meramente formales, así como cualquier abuso en las facultades que les concede la Ley.*

*V. REGULARIDAD. El Ministerio Público velará por la regularidad en la integración de las indagatorias, vigilará el correcto ejercicio de las facultades otorgadas a quienes en ellas intervienen y procurará su celeridad y su encauzamiento al descubrimiento de la verdad histórica.*

*Podrá aplicar criterios de economía procesal y subsanar y corregir los defectos o excesos en sus actuaciones siempre que la Ley no disponga lo contrario y ello resulte conducente para los fines de la indagatoria o para preservar los derechos de los involucrados o de cualquier tercero con interés debidamente acreditado.*

*VII. TRATO DIGNO. El Ministerio Público y sus auxiliares deberán proporcionar un trato digno y adecuado a toda persona con la que, con motivo de sus funciones, deban interactuar, independientemente de su edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, posición social o económica, discapacidad, condición física o estado de salud.*

*Siempre que el ofendido o la víctima se lo solicite le orientará y explicará suficientemente los tramites, procedimientos y posibles vicisitudes que puedan presentarse o que tengan que atenderse con motivo o como resultado de la integración de la indagatoria en la que estuvieren interviniendo”.*

*ARTÍCULO 7.- "ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el Código de Procedimientos Penales, la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos; además de las siguientes:*

*A. En la Averiguación Previa:*



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

*III. Investigar los delitos de su competencia con todas las facultades que este y otros ordenamientos jurídicos le otorguen. Para ello se auxiliará de la Policía Investigadora del Estado y de los Servicios Periciales y, en su caso, de los demás órganos y autoridades que prevea la Ley.*

*V. Recabar testimonios, ordenar peritajes, formular requerimientos, practicar inspecciones, preservar el lugar de los hechos, obtener evidencias y desahogar e integrar a la Averiguación Previa las pruebas que tiendan a acreditar las categorías procesales que determine el Código de Procedimientos Penales para fundamentar el ejercicio de la acción penal; así como para acreditar y cuantificar la reparación de los daños y perjuicios causados.*

### *C. Generales:*

*I. Velar, en la esfera de su competencia, por el respeto de los derechos humanos que otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y el Orden Jurídico que de ellas emana.*

*V. Promover lo necesario, dentro de sus atribuciones, para la recta y expedita administración de justicia.”*

Precisado lo anterior, el quejoso Q1 refirió que presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales de la Región Centro de la Fiscalía General del Estado, toda vez que en el año 2016 fue atropellado por una persona que trabaja en la empresa X, ocasionándole severas lesiones consistentes en cuatro fracturas de pelvis, reventamiento de esfínteres, de ano, y de glúteo, las cuales le dejaron secuelas ya que el esfínter no le volvió a funcionar, además de que presenta una hernia y problemas para caminar, dando inicio a la carpeta de investigación número ----/2016, la cual al momento de la presentación de su queja no ha presentado avances, ya que tanto él como su abogado han presentado elementos para su judicialización, negándose el ministerio público a pasar el asunto al juez, por lo que considera que el asunto debe ser turnado a la autoridad competente.

Por su parte, el A1, Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, al rendir el informe solicitado en relación con los hechos materia de la queja, anexó el oficio emitido por el



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

A2, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales en la Región Centro, en el que refiere que si bien, tanto el quejoso como su abogado han aportado todos los elementos para la judicialización de la carpeta de investigación, de los datos de prueba que obran en la carpeta, no se ha podido establecer plenamente la identificación del imputado. Toda vez que los testigos señalaron a un probable responsable de nombre E1 Alias "La X", quien es señalado como la persona que conducía el vehículo que provocó las heridas a la víctima. Motivo por el cual se han realizado diversas diligencias tendientes a la identificación plena del probable responsable lo cual no ha sido posible, siendo la causa principal por la cual no se puede ejercitar acción penal, ya que no se tiene el nombre completo de la persona, ni el domicilio donde puede recibir notificaciones.

Sobre el informe rendido por la autoridad, el quejoso compareció ante este organismo para desahogar la vista del mismo, refiriendo no estar de acuerdo con lo manifestado por la autoridad, toda vez que el ministerio público no ha pedido ninguna información al representante de la empresa que permita ubicarlo.

A fin de recabar mayores datos sobre las constancias que integraban la carpeta de investigación ----/UIV/2016, el 21 de noviembre de 2019, personal de esta Comisión de los Derechos Humanos se constituyó en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, Región Centro para realizar una inspección al expediente.

De la inspección practicada por este organismo público autónomo y del informe rendido por la autoridad, se advierte que se realizaron las siguientes actuaciones: 4 en diciembre de 2016, incluida la presentación de la respetiva denuncia, 1 en junio de 2017, 5 en agosto de 2017, 7 en septiembre de 2017, 2 en octubre de 2017, siendo estos últimos dos escritos por parte del abogado E9, mediante los cuales solicita copia de la indagatoria, permaneciendo inactivo hasta enero de 2018, mes en el que se realizó solo una diligencia, 1 en agosto de 2018, 2 en septiembre de 2018, 3 en octubre de 2018, 1 en noviembre de 2018 y 1 en diciembre de 2018. Posteriormente, en el año 2019 se realizó solo 1 diligencia en el mes de enero, 5 en mayo de 2019, 1 en julio de 2019, 1 en agosto, 3 en septiembre de 2019, 8 en octubre de 2019 y 1 en noviembre.



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

Lo que se traduce en que no hubo actuación alguna en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, noviembre y diciembre de 2017, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2018, febrero, marzo, abril y junio de 2019, meses en que la autoridad no realizó ninguna diligencia para acreditar los hechos presuntamente constitutivos de delito ni la probable responsabilidad de quien intervino en su comisión y valida el retardo negligente del responsable de la indagatoria, pues no existe causa que justifique esa inactividad durante el periodo señalado, sin pasar por alto el hecho de que en los meses de junio de 2017, enero de 2018, agosto de 2018, noviembre de 2018, diciembre de 2018, enero de 2019, julio de 2019, agosto de 2019 y noviembre de 2019, solamente se practicó una diligencia por mes y que en los meses de octubre de 2017, agosto de 2018, enero de 2019, julio de 2019, agosto de 2019 y noviembre de 2019 algunas de las actuaciones que se realizaron son acuerdos de recepción y citatorios.

Con lo anterior, se advierten claramente que en diversos periodos desde que se presentó la denuncia la autoridad investigadora no realizó diligencias de manera oportuna y pertinente para acreditar los hechos presuntamente constitutivos de delito y la probable responsabilidad de quien intervino en su comisión, ello por 18 meses, juntos todos los periodos de inactividad, y por ende, se acredita el retardo negligente del responsable de esa indagatoria, pues no existe causa que justifique esa inactividad durante los periodos antes señalados.

Es importante señalar que dada la naturaleza del hecho denunciado, el Agente del Ministerio Público desde el momento de conocer y radicar la misma, debió generar todas las acciones y diligencias necesarias para esclarecer la verdad histórica del hecho denunciado, requiriendo tanto los peritajes respectivos, las declaraciones testimoniales y el Informe Policial Homologado por parte de la Policía Investigadora, existiendo por tanto irregularidades en dicho informe y, con todo ello, se avala el dicho del quejoso en el sentido de haber transcurrido tiempo excesivo sin que su denuncia se hubiere resuelto.

Esta situación de dilación por parte de la autoridad responsable, ha quedado en evidencia en el caso que nos ocupa, toda vez que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, Región Centro, señaló en su informe, que no se ha podido judicializar el expediente debido a que no se ha identificado plenamente al imputado, sin embargo, de la inspección que se realizó a los autos de la carpeta de investigación, se advirtió que, una vez que se presentó la denuncia respectiva el 23 de diciembre de 2016, fue hasta el 26 de



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

junio de 2017, fecha en la que se solicitó un informe de los hechos denunciados a la oficina de recaudación de rentas de Monclova, por lo cual transcurrieron 6 meses para que se llevara a cabo el primer acto de investigación.

Respecto de lo anterior, al no realizar diligencias necesarias durante el tiempo referido, sin que exista una causa legal que justifique tal circunstancia, se traduce en un retardo negligente por parte del autoridad responsable, Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, Región Centro, pues su deber legal le impone realizar diligencias necesarias para cumplir, en forma debida y oportuna su función investigadora y persecutora de delitos con la celeridad que el asunto requiere y, a consecuencia de esa dilación, se vulnera el derecho a obtener una justicia pronta y completa.

Derivado de lo anterior, el Ministerio Público es una institución que brinda atención a las víctimas del delito con el respeto irrestricto a los derechos humanos de cualquiera persona que intervenga en la indagatoria y que la actuación del personal de la procuración de justicia se regirá, entre otros, bajo los principios de legalidad, lealtad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, principios a los que debió sujetarse la autoridad responsable y que omitió hacer en perjuicio del quejoso, según se expuso en párrafos anteriores.

En tal sentido, resulta evidente que al quejoso no se le ha garantizado, en forma debida, el acceso a la justicia y, en general, se ha visto violentado su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, pues es posible afirmar que la investigación de los delitos y persecución de los imputados no puede diferirse en el tiempo de manera ilimitada, debido a que la imposibilidad material para obtener los elementos de prueba para formular la imputación al sujeto se diluye conforme transcurre el tiempo, y es por ello que el límite de actuación de los servidores públicos se encuentra en la posibilidad real de allegarse nuevos elementos de juicio; de lo contrario, el mantener una investigación abierta después de transcurrido un plazo razonable puede arrojar información poco confiable sobre la eficacia con la que se desempeñan las instancias de procuración de justicia, sobre todo cuando el paso del tiempo es el principal enemigo de las investigaciones.

Por ello, la autoridad debe realizar todas las actuaciones necesarias para determinar lo que en derecho corresponda, de acuerdo a la naturaleza de los hechos expuestos en la denuncia y a la de las diligencias que practique, sin embargo, la autoridad investigadora incurrió en una dilación en la procuración de justicia, según se expuso anteriormente.



Por lo tanto se acredita que personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, Región Centro, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, incurrieron en retardo negligente en la función investigadora de los delitos, tendiente a practicar diligencias en tiempo prudente para fortalecer la investigación para acreditar datos que establecieran que se había cometido un hecho que la ley señale como delito y de que existía la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para investigar y conocer la verdad histórica de los hechos de la denuncia y, con base en ello, determinar lo que procediera conforme a derecho, no obstante tener el deber legal de hacerlo.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos previstos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, como actividad estatal previa a la impartición de justicia penal y el artículo 21 establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliara de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; y, por su parte, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que compete al Ministerio Público, como representante social, a través de sus agentes, la investigación y persecución de los delitos del orden común ante los tribunales.

De lo anterior se deriva que, para que una persona ocurra ante los tribunales a solicitar se le imparta justicia en un asunto penal, es requisito indispensable lo realice a través del Ministerio Público, quién es el único que puede investigar los delitos y su persecución, y, en virtud de que tiene dicha potestad en forma exclusiva, es evidente la importancia que reviste su función, para garantizar la seguridad jurídica de quienes ocurran ante dicha institución y, precisamente, esa función debe de estar apegada a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a los que se refiere el artículo 109, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los cuales son ratificados por la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 160, fracción 3, máxime si se considera que en la fase de investigación previa o no judicializada, la autoridad investigadora realiza una serie de diligencias, en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional.



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

Por ello, en dicha fase, el Ministerio Público es la autoridad administrativa con facultades para integrar la indagatoria; este periodo se inicia con la denuncia o la querrela y concluye cuando el Ministerio Público está en aptitud de judicializar o no el asunto ante la autoridad judicial, por lo que la autoridad debe realizar todas las actuaciones necesarias para determinar lo que en derecho corresponda, de acuerdo a la naturaleza de los hechos expuestos en la denuncia y/o querrela y a la de las diligencias que practique, sin embargo, la autoridad al no realizar esa función incurrió en inactividades injustificadas durante el trámite del expediente, según se expuso.

Con lo anterior, la actuación de la autoridad, contraviene y violenta en perjuicio del quejoso el artículo 6 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a los principios rectores en lo referente a las atribuciones del Ministerio Público y en lo referente a la investigación previa o no judicializada, a saber, la legalidad, lealtad, regularidad y el artículo 7 relativo a las atribuciones del Ministerio Público, antes transcritos y el artículo 127, 128, 129 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a la competencia del Ministerio Público, a su deber de lealtad, al de objetividad y debida diligencia y a sus obligaciones durante la investigación, en los siguientes términos:

### *CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES*

#### *"Artículo 127. Competencia del Ministerio Público.*

*Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión."*

#### *"Artículo 128. Deber de lealtad*

*El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable.*

*El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

*alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones.”*

*“Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia*

*La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso.*

*Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código.*

*Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación.*

*El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención.”*

*“Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público*

*Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:*

- I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados;*
- II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito;*



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

- III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;*
- IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento;*
- V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación;*
- VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;*
- IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba;*
- XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente;*
- XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda;*
- XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.”*

Con lo anterior, resulta evidente que se violentó el derecho a la legalidad y seguridad jurídica del quejoso, por la existencia de una dilación en la procuración de justicia por personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, Región Centro en la ciudad de Monclova.

El Estado ha diseñado un sistema normativo y un conjunto de instrumentos e instituciones para procurar y administrar justicia, pues no es permitido que los particulares la alcancen por sí mismos, sino a través de los órganos del Estado; sin embargo, estas instituciones deben ajustar



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

su actuación precisamente al sistema normativo y particularmente deben proteger y respetar los derechos humanos, entre los que se encuentra el del acceso a la justicia que, a su vez, comprende la garantía del plazo razonable.

Por otra parte, las conductas en que incurrieron las autoridades responsables implican una violación a los derechos humanos que consagra nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad con la siguiente normatividad:

El artículo 8.1. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que:

*"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".*

A su vez, el artículo 25.1. dispone:

*"Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".*

Con lo anterior, se violentan los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, respectivamente, que señalan lo siguiente:

*"Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente"*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

*"Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución"*

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/169 el 17 de diciembre de 1979, contempla algunas disposiciones relativas a la actuación de los servidores públicos, al establecer en el artículo 1 y 2, respectivamente, lo siguiente:

*"Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión".*

*"En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas".*

De todo lo anterior, el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, dispone lo siguiente:

*"El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:*

*I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.*

*II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

*III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.*

*Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.*

*Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.*

*Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.*

*Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo."*

En ese mismo tenor, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, en su artículo 52, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, antes transcrito. De acuerdo con el Manual Para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

*"La seguridad jurídica es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigilancia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio. El derecho a la seguridad jurídica comprende, entre otros, el derecho a la legalidad, el derecho al debido proceso, a ser juzgado por tribunales previamente establecidos dentro de un plazo razonable, el derecho de audiencia, el derecho a la presunción de inocencia, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; implican la abstención de actos privativos de la vida, de la libertad, de las propiedades posesiones, o derechos, así como la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. En ese sentido es indispensable*



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

*garantizar la convicción al individuo de que su persona y bienes serán protegidos por el Estado dentro de un orden jurídico preestablecido, y en la eventualidad de que sean conculcados, le será asegurada su reparación. Con la finalidad de combatir la impunidad se hace patente el reconocimiento del derecho a la seguridad jurídica que puede hacer valer todo ser humano ante cualquier ataque a su persona, vida, libertad en todos sus aspectos: personal, de procreación, de tránsito, de residencia, de religión, de opinión y expresión, reunión y asociación, de propiedad y posesión de bienes y derechos, familia o domicilio. Por último, es importante señalar que en la investigación de violaciones al derecho a la seguridad jurídica no debe ser soslayado el marco normativo secundario, el cual busca armonizar la legislación nacional con los compromisos adquiridos en el ámbito internacional, con la intención de garantizar de forma eficaz la observancia de los derechos humanos.”*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que deben tomarse en consideración tres elementos para la determinación del plazo razonable, a saber: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales.<sup>1</sup> Ello en virtud de que la integración de la averiguación previa penal tiene la particularidad de no estar sujeta a plazo, sin embargo, ello no implica que pueda prolongarse indefinidamente en el tiempo, por lo que la Corte ha fijado estos principios para la apreciación de la posible vulneración de la garantía del plazo razonable. Esto constituye un parámetro para la determinación de la existencia de violación a derechos humanos por omisión del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa. Con ello, se advierte que es la actuación negligente del Ministerio Público la que ocasiona un perjuicio latente al derecho por parte del ofendido a que se le administre justicia de forma pronta y expedita.

Al respecto, vale la pena retomar el contenido de la Recomendación General número 16 formulada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el plazo para resolver las averiguaciones previas, dirigidas a todos los Procuradores Generales de las Entidades Federativas que en la parte que interesa señala:

*"La falta de resultados por parte de las instancias encargadas de la procuración de justicia del país no sólo obedece a la carga de trabajo, sino también a la ineficiencia o apatía de los*

---

<sup>1</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C. Número 137. Párrafo 166.



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

---

*responsables de la investigación, quienes en muchos de los casos se dedican a esperar que las víctimas aporten elementos que ayuden a integrar la averiguación previa, o que los peritos rindan sus dictámenes, sin que exista una verdadera labor de investigación en la que se realicen las diligencias mínimas necesarias.”*

Otra parte de dicha Recomendación General establece que:

*“Es importante señalar que para esta Comisión Nacional los agentes del Ministerio público, a fin de garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de su labor con las diligencias mínimas para: a) evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por los periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos, f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de la práctica de elaborar actas circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas, g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas de investigación y h) propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función”*

De ahí que todo servidor público debe ajustar su conducta a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y, en caso de apartarse de ellos deberá fincársele la responsabilidad que resulte procedente y en el presente asunto, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no aplicaron los principios de los que se refieren los artículos mencionados, toda vez que incurrieron en una violación a los derechos humanos del quejoso, en la forma antes expuesta.

Para esta Comisión de los Derechos Humanos, quedó acreditado que personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, Región Centro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, violaron los derechos humanos del quejoso Q1, pues con la dilación en la procuración de justicia en que incurrieron ello implicó una violación a su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.



Es importante señalar que no es cuestión de estudio, de referencia, de valoración ni de pronunciamiento por parte de esta Comisión, el hecho de que la autoridad debiese judicializar o no el asunto por determinado delito por los hechos materia de la indagatoria, pues por disposición constitucional, ello constituye una función propia del Ministerio Público, de la que este organismo carece de competencia para intervenir, sino lo que constituye violación al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica del quejoso es el deber de la autoridad de determinar lo que en derecho corresponda en relación con la investigación de los hechos materia de la indagatoria y, por ello, la importancia de emitir la presente Recomendación estriba no tan solo para restituir los derechos del quejoso o para señalar a las autoridades responsables de las violaciones de sus derechos humanos, sino más bien, en dar a conocer las irregularidades que estructuralmente presentan las actuaciones de la autoridad.

No pasa inadvertido, que los funcionarios encargados de la procuración de justicia tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en tal sentido, en un sistema basado en normas jurídicas y procedimientos resulta reprochable que incurran en conductas que violen los derechos humanos de las personas, en franca violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes transcrito.

Es de suma importancia destacar que en atención a que el quejoso Q1, tiene el carácter de víctima, toda vez que ha quedado plenamente demostrado que fue objeto de violación a sus derechos humanos por personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Centro, por lo que resulta procedente y necesario emitir la presente Recomendación.

En tal sentido, en el ámbito internacional, se han creado los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derechos Internacional Humanitario a interponer Recursos y obtener Reparaciones, dicho instrumento establece que:

*".....Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario....."*



Asimismo, establece que:

*".....La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado....."*

De igual manera, se establece en la Ley General de Víctimas, en su artículo 7:

*"Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.*

*Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:*

*I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral;....."*

De igual manera, para que pueda existir reparación plena y efectiva, la misma se podrá otorgar en diversas formas, siendo estas mediante las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y medidas de garantías de no repetición, resultando aplicables al caso concreto, la medida de satisfacción y de garantía de no repetición y por lo que hace a la medida de satisfacción, han de aplicarse las sanciones administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos fundamentales del quejoso.

En cuanto a la medida de garantía de no repetición, es necesario atender a la promoción de la observancia de funcionarios públicos de los diversos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y los contemplados en nuestra Constitución, así como a los lineamientos donde se establecen facultades y obligaciones de servidores públicos en el área de procuración de justicia, por lo que es necesario se brinde capacitación al personal de la Agencia Investigadora del Ministerio



## Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

Público de de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Centro, sobre la promoción, respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas y en la legislación que regula su actuar, para que se conduzcan con apego a la ley.

Es menester recalcar que todo lo aquí expuesto tiene por finalidad, en estricto apego al cometido esencial de esta Comisión, el colaborar con las instituciones que, como la actualmente Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se esfuerzan por erradicar prácticas comunes que en otros tiempos fueron insostenibles, y que ahora, al margen de la protección de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, obligan a todas las instituciones a la búsqueda de la protección de los derechos fundamentales y crear los mecanismos legales necesarios contra toda conducta que los lastime, ello a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero y tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

*"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

.....

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."*

En este contexto, y al haber quedado plenamente acreditada la violación a los derechos humanos del quejoso, así como el incumplimiento a las obligaciones impuestas a la autoridad ministerial, es necesario se tomen las medidas necesarias para evitar que se continúe incurriendo en violación a sus derechos humanos.



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de concluirse:

**PRIMERO.** - Son violatorios de los derechos humanos los actos denunciados por el quejoso Q1 en su perjuicio, en los términos expuestos en la presente Recomendación.

**SEGUNDO.** - Personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Centro, incurrieron en violación al derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de justicia, por los actos precisados en la presente Recomendación.

En atención a que la carpeta de investigación respectiva, se lleva ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público de de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Centro, de la actualmente denominada Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Centro, cuyo superior jerárquico es el Fiscal Ministerial quien es el responsable de supervisar, controlar, dirigir las actividades del Ministerio Público, según el artículo 26 de la Ley Orgánica de La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dicha autoridad es el superior jerárquico de la autoridad que actualmente integra la indagatoria, sin perjuicio de que el Fiscal General del Estado verifique su seguimiento.

En virtud de lo señalado, al Fiscal Ministerial en su calidad de superior jerárquico de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales de la actualmente denominada Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ante quien se integra la indagatoria respectiva, se:

### **R E C O M I E N D A**

**PRIMERO.-** Se instruya a la Agencia Investigadora del Ministerio Público de de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, de la Fiscalía General del Estado, Región Centro, que integra la carpeta de investigación ----/UIV/2016 iniciada con motivo de la denuncia presentada por el quejoso Q1, a efecto de que, en forma inmediata, analice las constancias de la indagatoria mencionada y determine cuáles son las diligencias necesarias e idóneas para esclarecer los hechos denunciados, y con base en ello, desahogue las pruebas conducentes y necesarias que



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

la indagatoria requiera por su naturaleza y las que se encuentren pendientes de diligenciarse, tendiente a indagar sobre la verdad histórica de los hechos y determinar lo que en derecho corresponda, y con ello, concluir la carpeta de investigación referida, para así garantizar al quejoso el acceso a la procuración de justicia, y en general, su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, remitiendo las pruebas que acrediten el cumplimiento de este punto recomendatorio, ello para el caso de que aún no lo hubiere realizado y lo informe debida y oportunamente a esta Comisión y, para el caso de que ya lo hubiere efectuado, remita copia certificada de las constancias que así lo acredite.

**SEGUNDO.** - Se brinde información al quejoso Q1 del estado y avances que se realicen dentro de la carpeta de investigación ----/UIV/2016 que se integra ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público de de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, de la Fiscalía General del Estado, Región Centro, manteniendo comunicación directa con el quejoso, debiendo brindarle atención oportuna y adecuada.

**TERCERO.-** Se instruya a los Agentes del Ministerio Público a efecto de que, en el ejercicio de sus funciones, garanticen una adecuada procuración de justicia, desahogando las diligencias mínimas para: a) evitar la dilación y/o irregular integración en el trámite de la averiguación previa y/o carpetas de investigación, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos, f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de la práctica de elaborar actas circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas, g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas de investigación, h) propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función e i) evitar el incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia mediante el conocimiento de las funciones que les compete como funcionarios públicos.



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

**CUARTO.** - Se implementen las medidas necesarias para que no se repitan actos de dilación en la procuración de justicia que resulten violatorios de derechos humanos en perjuicio de persona alguna por servidores públicos de las áreas a su cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**QUINTO.-** Se brinde capacitación a los servidores públicos a su cargo de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de de la Unidad de Investigación y Litigación de Asuntos Viales, de la Fiscalía General del Estado, Región Centro, con el propósito de que conozcan los límites de su actuación y se les inculque el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos a quienes sirven, así como para concientizarlos de las implicaciones que tienen las irregularidades que se cometen durante sus actuaciones y sobre el estricto respeto que deben guardar hacia a los derechos humanos de todas la personas con quienes tratan con motivo de sus funciones, con el propósito de que conozcan los límites de su actuación y se les inculque el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos a quienes sirven; de igual forma se dé especial énfasis al a los temas de dilación en la procuración de justicia y se evalúe su cumplimiento, en forma periódica, en función al desempeño de los servidores públicos.

**SEXTO.-** Para los efectos a que se refiere el artículo 100 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se de vista a la Dirección General de Contraloría y Vistaduría de dicho organismo para que, en relación con la presente recomendación, ejerza las atribuciones que le correspondan, de conformidad con los términos establecidos en dicho precepto, e informe de ello a esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En el caso de que la presente recomendación sea aceptada, de conformidad con el artículo 130 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y 102 de su Reglamento Interior, solicítese al superior jerárquico de la autoridad responsable lo informen a esta Comisión dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación y hágaseles saber que, en caso contrario, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 195 párrafo tercero, inciso 13 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y se procederá conforme al numeral 130 de la Ley de la Comisión de los Derechos humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.



## **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza**

---

En el supuesto de que sea aceptada la Recomendación que se emite, deberán exhibirse las pruebas de su cumplimiento, las que habrán de remitirse a esta Comisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la aceptación de la misma. En caso de estimar insuficiente el plazo, podrá exponerlo en forma razonada, estableciendo una propuesta de fecha límite para probar el cumplimiento de la Recomendación.

No omito hacer de su conocimiento que es obligación de todo servidor público, responder a las recomendaciones que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza les presente, esto de conformidad a lo establecido por los artículos 102, apartado B, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195, tercer párrafo punto 13, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cometerá desacato el servidor público que tratándose de requerimientos o resoluciones en materia de defensa de los derechos humanos no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información. En ese sentido, en caso de no pronunciarse sobre la recomendación emitida, podrá ser sancionado con alguna de las penas previstas para las faltas administrativas que contempla el cuerpo legal antes invocado.

Notifíquese personalmente esta resolución al quejoso Q1 y por medio de atento oficio al superior jerárquico de la autoridad responsable, para los efectos a que haya lugar. Así, con fundamento en las disposiciones legales invocadas en esta determinación y, con base a los razonamientos que en ella se contienen, lo resolvió y firma el Doctor Hugo Morales Valdés, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
NOTIFÍQUESE.-----

**DR. HUGO MORALES VALDÉS.  
PRESIDENTE**